

3 de julio: la larga noche o el amanecer de México

JORGE BRAVO

Los ciudadanos mexicanos llegamos a las elecciones del 2 de julio en un clima político-electoral adverso (de confusión, escepticismo, hartazgo, desencanto, pesimismo...) para ejercer uno de los derechos democráticos más elementales, pero escamoteado durante largo tiempo: depositar el sufragio en las urnas, con base en información "útil" para orientar al ciudadano sobre las distintas opciones partidarias, y con "plena libertad".

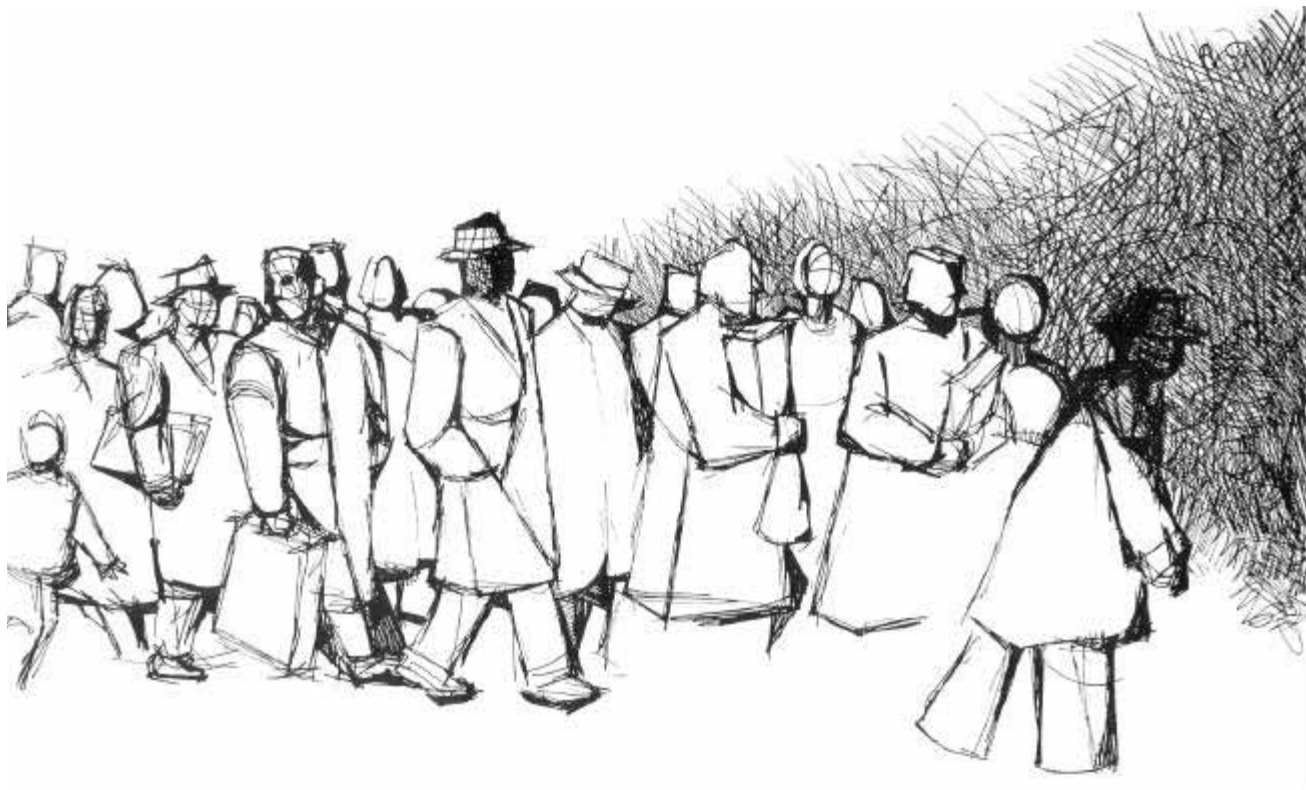
En primer lugar, según estimaciones, ese derecho fundamental no será ejercido por aproximadamente el 60 por ciento del padrón electoral. Ese elevado porcentaje, si bien no es exclusivo de México, sí nos indica que algo podrido huele en nuestro país, neófito en la democracia.

Las campañas de promoción del voto –responsabilidad del Instituto Federal Electoral, pero en las cuales también se involucraron las televisoras comerciales, algunas empresas y la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aunque con evidentes fines de legitimidad y/o de inducción– no habrán funcionado.

Según datos del IFE, el 52.4 por ciento del padrón electoral para las elecciones de 2006 estuvo integrado

por jóvenes de entre 20 y 39 años de edad. 2.4 millones de ellos "ejercieron" el sufragio por vez primera. Asimismo es el sector social más propenso al abstencionismo. Sólo en las elecciones federales de 2003 dejaron de asistir a las urnas entre el 60 y el 70 por ciento de la población joven. Ésta es una de las razones por la cual los candidatos de todas las fracciones políticas pretendieron conseguir el apoyo de los jóvenes, sobre todo "garantizándoles" empleo –como Felipe Calderón–, o bien a través de estrategias poco convencionales como posar en revistas para caballeros.

El abstencionismo nos conduce al tema de la popularidad. ¿Cuál popularidad de los candidatos? ¿Cuál carisma? ¿Cuál campaña de imágenes o de personalidades? Quien resulte triunfador en los comicios será constitucionalmente legítimo, ¿pero podrá o tendrá la capacidad para gobernar? ¿De qué habrán servido los consejos de los especialistas en marketing político, los millones de pesos derrochados en la transmisión de spots, el especial cuidado que ponen en detalles inocuos como el nudo de la corbata de los candidatos, si no habrán conseguido llevar a los electores a las casillas y el apoyo de estos habrá sido irrisorio? Es más, ¿quién puede asegurar que la intención de los partidos es estimular el voto, cuando lo que les interesa en realidad es el apoyo



John MacGhee

pasivo de los ciudadanos? Los votos obtenidos en las elecciones serán suficientes para designar a un presidente de la República, pero son insignificantes en comparación con el número de sufragios que no respaldaron ese mismo “proyecto” político, incluidos, por supuesto, quienes optaron por abstenerse, por anular su voto (ambas decisiones respetables) o sufragaron a favor del Dr. Simi.

Los ciudadanos toleramos una prolongadísima campaña electoral iniciada oficialmente el 19 de enero, pero que de manera voluntariosa comenzó a la par del sexenio foxista. Resulta tan surrealista y desgastante un proceso electoral tan largo, que de extenderse por más tiempo le hubiera alcanzado para ganar a Patricia Mercado o a Roberto Campa.

Y es que las campañas y su cobertura estuvieron tan centralizadas en los candidatos a la Presidencia, que los ciudadanos –y desde luego los medios de comunica-

ción– nos olvidamos de la conformación del Congreso de la Unión, de los diputados y los senadores a elegir, factor clave para la gobernabilidad del país, y en donde es posible detectar el reciclamiento político, las corrientes en pugna, los intereses inconfesables representados, etcétera. Es decir, tuvimos exceso de información (no toda de calidad) para elegir a un Presidente, pero prácticamente nula para conocer las “propuestas” de los futuros legisladores del país, lo cual no es poca cosa, como tristemente constatamos durante el sexenio que se extingue.

Un sinsentido fue el “pacto de civilidad” firmado por cuatro fuerzas políticas (con excepción de Nueva Alianza), por encima del marco jurídico del órgano electoral, y en el cual se le exigió al presidente no anunciar el resultado de la elección antes de que lo haya hecho el IFE. Un absurdo en todos sentidos porque nunca se

incluyó a un representante del gobierno federal, como correspondería; pues el Ejecutivo –con su abierto y lamentable proselitismo– dejó de ser el fiel de la balanza, por no haberse conducido como un mandatario auténticamente demócrata, en unos comicios aún frágiles.

En esta elección las encuestas no contribuyeron (en el sentido de orientar) a la decisión de los votantes. Sirvieron, más bien y de nueva cuenta, como armas políticas. De acuerdo con diversos especialistas, las encuestas son una fotografía del momento político en el cual se hicieron públicas pero no predicen los resultados de la elección. La desconfianza generalizada hacia los mecanismos demoscópicos nos obliga a esperar a las cifras oficiales de la elección, proporcionadas por el IFE, para constatar cuáles encuestas se apegaron a una metodología estricta y lograron acercarse a los resultados electorales, y cuáles pretendieron influir en los electores en beneficio de algún partido.

Durante la campaña electoral asistimos –en mayor o menor medida– a un ambiente de inédita polarización política e ideológica, que contradice a quienes décadas atrás vaticinaron el “fin de las ideologías”. Sin embargo, durante los próximos años podremos constatar –sin importar quién haya ganado la elección– si realmente la sociedad mexicana se aproxima (superado el régimen de partido preponderante) a un escenario político similar, mutatis mutandis, al del siglo 19, en el cual se enfrentaron liberales y conservadores, hoy en día convertidos en políticos de izquierda y/o derecha. Sin olvidar que en el reciente proceso electoral las posturas ideológicas hicieron gala de maniqueísmos, oportunismos, contradicciones, relativismos y pontificaciones de los autodenominados “puros”.

A diferencia de hace seis años, cuando el objetivo principal –podríamos decir que el único– era derrocar al PRI en las urnas, en esta ocasión se trató de una elección en la cual se eligió –y hubiera sido deseable que se pon-

derara con todas sus implicaciones– uno de los dos proyectos de nación, si bien no del todo antagónicos, sí, por lo menos, diferentes. La de 2006 fue una elección de coyuntura postergada, pues un corte de caja nos mostraría que el presidente Fox dejó escapar –por incapacidad o impericia– la oportunidad histórica de proyectar al país hacia delante: en su sistema político, en su economía y en una nueva relación entre el Estado (más democrático) y la sociedad.

El sufragio efectivo también es relativo. De alguna u otra manera, los tres principales partidos apelaron a prácticas electorales propias del autoritarismo. Del PRI y del PRD ya conocemos el acarreo y la compra y coacción del voto. La novedad fue el PAN-gobierno porque contradujo sus principios básicos y su vocación de partido democrático, a través del apoyo directo y burdo –sin llegar a una elección de Estado– del presidente Vicente Fox al candidato panista. También resultado de un clientelismo “moderno” fue el apoyo de empresas como Coppel o Bancomer, o de la Coparmex a Felipe Calderón. El PRI, fiel a su costumbre, apostó al funcionamiento de la maquinaria electoral, mediante la subrepticia intervención de los gobernadores y presidentes municipales priístas. No olvidemos que en México siguen operando micro autoritarismos que hacen languidecer a la democracia a escala nacional. El PRD supo capitalizar al máximo las obras realizadas en el Distrito Federal y las políticas de desarrollo social como el apoyo económico a los adultos mayores, a las madres solteras y las exenciones populistas de contribuciones a ciertos habitantes de la ciudad.

Aún más grave: ¿podemos hablar de sufragio efectivo cuando las legítimas demandas sociales se dirimen con violencia y se inocular el miedo en la sociedad? Los acontecimientos de San Salvador Atenco y del magisterio en Oaxaca, incluida la presencia de Marcos, desatados con evidentes fines políticos, deterioraron intencio-

nalmente el proceso electoral. El caciquismo vetusto y “moderno” se jugó su permanencia en el poder; a cambio, despertó en el electorado el miedo a ejercer sus derechos políticos.

¿Se ejerció el voto con entera libertad? Para ello era necesario contar con una diversidad de fuentes de información independientes del poder político. Como suele ocurrir en los periodos electorales, la prensa escrita tomó partido pero sin hacer explícitas sus legítimas simpatías: La Jornada respaldó a López Obrador; Reforma, a Calderón; La Crónica de Hoy decidió ejercer un periodismo panfletario en contra del candidato perredista, etcétera.

Aquí incluyo a los intelectuales promotores del “voto útil” a favor de AMLO. Algunos de ellos escriben artículos en las páginas editoriales de los periódicos, o colaboran en ediciones radiales o televisuales. Ante el espaldarazo público a favor de ese candidato, ¿dónde queda el análisis, la ecuanimidad, la objetividad que exige el quehacer periodístico o académico? Una vez que se pronunciaron a favor de un partido, del PRD o cualquier otro, ¿para qué seguir leyéndolos, para qué escucharlos si sus comentarios se convierten –por definición– en propaganda? Esos mismos intelectuales votaron hace seis años por Vicente Fox y ahora se rasgan las vestiduras y regañan al pueblo de México. Como entonces, están en su derecho, pero no quieren ser responsables de su decisión. Su “voto útil” propició un gobierno ingobernable, dividido. En el 2006 pretenden cubrir su culpa cometiendo el mismo error. Proselitismos de esa naturaleza atentan contra el sufragio efectivo y libre.

Televisa y TV Azteca parecieron abiertas a la pluralidad política, pero la democracia no puede funcionar con la concentración de medios electrónicos que existe en nuestro país. Ambas empresas conciben a la democracia como un negocio. Las dos acapararon más del 60 por ciento de los presupuestos de los partidos. El duopolio televisivo obstruye cualquier intento de equidad infor-

mativa. Insistir en que la concentración mediática deteriora la democracia pareciera un cliché más. Sin embargo, resulta tan trágicamente real que la aprobación y posterior publicación de la llamada Ley Televisa, en el contexto de subordinación de la élite política en el cual ocurrió, en pleno proceso electoral y con el beneplácito implícito y/o explícito de todos los candidatos, propicia que el ganador en las elecciones se encuentre de hecho limitado en sus facultades, no sólo por un predecible Congreso fragmentado, sino por un emporio de medios que supo imponer las reglas del juego. El candidato que acceda a la Presidencia de la República se hallará –ante su previo sometimiento– acotado, circunscrito; en un clima en el cual cada decisión deberá ser negociada con un poder fáctico como el mediático, que en todo caso no fue el garante de la legitimidad del triunfador, pero con capacidad real de vigilancia, extorsión y chantaje resultado de su capacidad económica, su injerencia política en todos los ámbitos y su vocación de perros guardianes a través de los periodistas y los conductores de la radio y la televisión.

Gane quien gane, el panorama es adverso y el camino lleno de obstáculos. Sin embargo, la revancha histórica se vuelve a hacer presente, como hace seis años. Los mexicanos todos, incluida la élite política, aprendimos del sexenio foxista. Necesitamos, de entrada, un presidente serio y conciliador. La solución de nuestros problemas –viejos y nuevos– requiere más que nunca del filtro de la política.

El 3 de julio los mexicanos despertaremos con el pie derecho o izquierdo, en el más literal de los sentidos ideológicos. Lo importante será la inteligencia, de los futuros gobernantes y de la sociedad en su conjunto, para darnos cuenta de que, para caminar y avanzar, necesitamos de ambas piernas. De lo contrario, renquearemos otros seis años. ■

beltmondi@yahoo.com.mx